

El Estado de Sitio y las tareas del Movimiento Popular

2 de febrero de 1985

Izquierda Cristiana de Chile



Una semana después del Estado de Sitio, la C.P. luego de efectuar un primer análisis de la nueva situación emitió la declaración pública "La izquierda Cristiana Frente al Estado de Sitio". En ella revisábamos algunos de los antecedentes que habían llevado a Pinochet a implantar este estado de excepción. El presente documento es un complemento de aquel texto, originado en los numerosos comentarios que nuestra dirección recibiera de militantes del Partido y de dirigentes de organizaciones populares. Intentamos caracterizar el cuadro que ahora aparece más nítido y también ordenar en forma más clara algunos de los elementos que han servido de base a los análisis que en las últimas semanas hemos realizado. Definimos las tareas del partido en el presente período y formulamos una propuesta política al conjunto de las fuerzas populares y democráticas.

EL ESTADO DE SITIO Y LAS TAREAS DEL MOVIMIENTO POPULAR

I.—LA CARACTERIZACION DE LA ETAPA ANTERIOR.

A nuestro juicio, el 6 de Noviembre de 1984 con el establecimiento del Estado de Sitio se inició una nueva fase en el desarrollo de la dictadura. Con ésto queremos decir que el escenario político cambió y que existen nuevas tendencias en la coyuntura y una táctica diferente por parte de Pinochet.

La etapa anterior a la actual se extiende entre Mayo de 1983 y Noviembre de 1984 y en ella debemos buscar los antecedentes y las explicaciones de la situación que hoy enfrentamos.

Dicho período se caracterizó por la debilidad política del régimen, por la agudización de sus contradicciones internas, por el desdibujamiento definitivo de sus planes y proyectos, por la intensidad de la crisis económica y la recesión y por la existencia de amplias oportunidades para la iniciativa política de las fuerzas opositoras.

El rasgo fundamental durante este año y medio fue que la oposición se constituyó en una mayoría nacional, mostrando una clara vocación de ruptura, mientras la dictadura quedaba en forma cada vez más evidente en una posición minoritaria. Este hecho produjo importantes efectos:

1. la emergencia de un protagonismo popular que tuvo como centro de la lucha democrática e iniciativa política opositora al movimiento social;
2. derogación de facto del receso político impuesto desde 1973, conquistándose el derecho de actuar públicamente;
3. recuperación de algunas libertades públicas como el derecho de reunión y asociación, así como la ampliación de los espacios del pensamiento crítico, que se tradujo en una mayor libertad de prensa y opinión alcanzando las posiciones democráticas una clara hegemonía en la sociedad, a pesar de las restricciones existentes y el uso monopólico del régimen de algunos medios de comunicación como la televisión.

Todo esto fue posible por el impacto de varios factores:

(-) La recesión económica iniciada en el segundo trimestre de 1981 alcanzó efectos devastadores que afectaron a capas medias y grupos de altos ingresos hasta ese momento partidarios de Pinochet (sólo en 1982 Chile experimentó una caída del producto geográfico bruto del 15, 40%, la mayor de los últimos 50 años).

(-) El impacto acumulado por la violación de los derechos humanos, la falta de tolerancia a cualquier pensamiento que no fuera oficial y la represión y la tortura dió una fuerza a las demandas democráticas que en los años anteriores no había existido.

(-) Junto a ello se registró una reorganización de muchas organizaciones populares como Sindicatos, Federación de Estudiantes, Organizaciones de Pobladores, Agrupaciones de Cesantes y de Trabajadores del PEM y del POJH; el "tejido social" se reconstruyó en alguna medida y esto unido a la reactivación de los partidos facilitó las expresiones de descontento y rebeldía populares.

Las Protestas Nacionales tuvieron, por lo mismo, un dinamismo sorprendente, que tomó por sorpresa hasta el propio Pinochet. Después de 10 años la aspiración de poner término a la dictadura se pudo manifestar abiertamente y se convirtió en el punto central de la movilización social.

En nuestra opinión, existieron durante esta etapa, condiciones apropiadas que hacían posible incluso poner término a la dictadura y sacar a Pinochet del poder. Por ello en el examen político que deben realizar todas las fuerzas democráticas, la reflexión sobre el por qué no se logró esto debe ocupar un lugar importante.

La I.C. cree que para restablecer un trabajo eficaz en las actuales condiciones de Estado de Sitio resulta fundamental efectuar un balance de los éxitos y fracasos de este período. Ya, sumariamente, nos hemos referido a los avances. Muchos de ellos subsisten a pesar de la nueva situación legal, lo que hace que no estemos partiendo de cero al reorganizarnos para la lucha. En cuanto a los errores nos interesa también analizarlos con franqueza y claridad para tratar de superarlos en la acción futura de los sectores democráticos.

De las muchas fallas y errores que en 1983 y 1984 cometió la oposición, nos parece que tres fueron determinantes para impedir la caída de Pinochet en ese período.

1) *La falta de unidad de los opositores democráticos* que impidió presentar una alternativa concreta a la dictadura y coordinar una táctica común de lucha.

La imposibilidad de vencer la política de exclusión del PC sustentada por algunos sectores de la A.D., terminó generando una dinámica de dispersión de las fuerzas opositoras, abriéndose una brecha que manipuló habilmente el régimen. Así, en algunos momentos el afán excluyente de sectores de la A.D. pareció más fuerte que su disposición de poner término a la dictadura y, en otros, los intentos de excesiva radicalización en la lucha – como medio de consolidar una posición dirigente en el movimiento popular – terminó por afectar la necesaria participación activa de la mayoría social en la lucha democrática, reeditándose formas de sectarismo y descalificación que ocasionaron serios daños a la izquierda en el período previo al golpe de estado de 1973. El Bloque Socialista, más allá de sus buenas intenciones, no fue capaz de modificar este cuadro.

De este modo, más que una oposición unida en torno a objetivos claros existieron varias oposiciones, con un creciente antagonismo entre ellas. En este contexto, no fue posible implementar ni siquiera las iniciativas que, en teoría, todos compartíamos como ocurriría con el Pacto Constitucional. Mucho menos se logró tener una dirección política común o un plan de lucha compartida. Muchas cuestiones teóricas, especialmente referidas a las formas de lucha y al uso de la violencia que el buen sentido habría permitido resolver se elevaron a la categoría de asuntos de principio y se usaron para descalificar a quienes no compartían determinados criterios ideológicos.

Esto restó gran parte de su eficacia a la oposición. Por el contrario, en las escasas oportunidades en que los referentes nacionales llegaron a acuerdos unitarios, en vísperas de algunas protestas o de otras jornadas de movilización, el estado de ánimo de los sectores populares fue muy alto, los resultados alcanzados fueron superiores y resultaron estimulantes para proseguir la lucha.

2) *La precariedad del órgano de dirección del movimiento social, y la insuficiente reorganización de las Organizaciones Populares* restó densidad orgánica a la acción de la oposición e impidió dar un carácter continuado a la ofensiva contra la dictadura.

En este período se pudo comprobar unas de las claves históricas en el desarrollo de las alternativas populares en nuestra Patria: la relativa al papel central de las organizaciones del pueblo. En todo nuestro pasado, hasta culminar en la victoria de Salvador Allende en 1970, los avances de las fuerzas democráticas han estado directamente ligados a una mayor organización de las entidades populares. Sin ellas los Partidos carecen de fuerza y continuidad y tienden a sobrepoliticizar las plataformas. La actividad popular, por su parte, se convierte en una suma de acciones abruptas y discontinuas sin que resulte posible consolidar los resultados que se buscan.

Entre Mayo de 1983 y Noviembre de 1984 el grado de recomposición orgánica de las organizaciones populares que fue muy significativo, estuvo por debajo de las necesidades. Los estudios técnicos más serios demuestran que, sólo el 11% de las masas trabajadoras tienen hoy una organización de calidad equivalente a la que tenían hasta 1973. En el Comando Nacional de Trabajadores, por ejemplo, están representados 400.000 trabajadores sobre una masa organizada de más de 800.000 y una población económicamente activa de más de 3.000.000. – En el campo poblacional se estima que en Santiago viven un millón 300.000 personas, en poblaciones populares; de ellas sólo el 22%, poco más de 280.000, están afiliadas a alguna de las muchas organizaciones existentes. En el terreno del movimiento estudiantil, si bien se acabó en 1984, por lograr la reconstrucción de la FECH y de otras federaciones estudiantiles, este fue un trabajo lento y difícil en que queda mucho por hacer. En materia de organizaciones campesinas, por último, a pesar de los avances, las insuficiencias organizativas fue la regla más que la excepción, lo que hizo que todo el movimiento de lucha democrática tuviera una dimensión casi exclusivamente urbana. Los efectos de este hecho no se hicieron sentir con mucha fuerza al comienzo por el carácter explosivo y generalizado del descontento. Sin embargo, cuando el régimen reordenó sus fuerzas y comenzó a presentar un contraproyecto con Jarpa como estratega político y la nueva política económica de Collados y Escobar Cerda que se propuso recuperar a las organizaciones empresariales más críticas del esquema de los Chicago Boys – se pudo advertir que para profundizar la lucha se necesitaba mucho más organización popular de la que se tenía.

Por otra parte, valorando profundamente el rol jugado por la CNT, de cuya iniciativa surge el Comité Unitario de Movilización Social (CUMS), no se logró constituir un órgano de dirección con suficiente representatividad social y competencia, que con legitimidad le diera conducción el conjunto diverso del cuerpo social.

3) *La ausencia de un acuerdo explícito sobre el camino para poner término a la dictadura* que llevando a los tres referentes nacionales a desacuerdos que se pudieron haber evitado.

En la práctica, existió inicialmente, un consenso tácito en torno a la línea de la movilización popular y la desobediencia civil. Se aceptaba por todos que Pinochet no estaría dispuesto a ceder el poder y que intensificaría la represión para tratar de mantenerse en el Gobierno; por lo tanto, se admitía que no existían condiciones pa-

ra una negociación con el régimen (al menos, mientras Pinochet conservara la autoridad unipersonal que lo convierte en el único factor de poder verdadero y decisivo al interior de éste). Por ello era indispensable desatar una movilización popular sostenida que erosionara la capacidad de mando del propio dictador y que fuera creando un ambiente generalizado de indisciplina que remataría en la creación de condiciones de ingobernabilidad. Porque si una mayoría creciente de chilenos "hacía lo que el gobierno prohibía y desobedecía lo que el gobierno mandaba" se llegaría a un cuadro político en que Pinochet estaría completamente debilitado. En ese momento, una paralización prolongada de todas las actividades productivas en que participaran los sectores sociales más activos del país debía encargarse de crear un contexto político que culminaría con la salida de Pinochet del poder.

Por nuestra parte, estamos convencidos de la viabilidad y de la corrección de esta línea de movilización social y desobediencia civil que ha sido la base de nuestra política y que lo seguirá siendo en el futuro. Creemos, en cambio, que el resultado producido se ha debido al progresivo alejamiento de algunos sectores democráticos de este esquema, implícitamente acordado luego de las primeras protestas. Aquí han operado dos "tentaciones" que se explican por la dispersión de la actividad opositora que ya analizamos. Una consistió en imaginar la movilización sólo como el requisito para negociar, con la fracción aperturista del régimen, una salida; a nuestro juicio este tipo de precipitación que olvida que el factor decisivo dentro del régimen es la voluntad del propio Pinochet, se pudo apreciar claramente en las fallidas negociaciones entre la A.D. y el régimen de Agosto de 1983. La otra tentación también presente fue la del cambio del camino político por el enfrentamiento militar, al pensarse que el dinamismo de la movilización de masas podía llegar a cambiar el escenario hasta el grado que permitiera desarticular militarmente a la F.F.A.A.; esta posición maximalista no ha sido abiertamente sostenida por ningún partido, pero muchas de las conductas del F.P. Manuel Rodríguez, especialmente la intensificación de acciones armadas de represalias sobre carabineros que precedieron el Estado de Sitio se fundan en este supuesto.

La existencia de estas dos tentaciones, alternativas a la estrategia de movilización social y de desobediencia civil, generó desconfianza y distanciamientos en el campo de la oposición e impidió concertar los acuerdos que habrían permitido la formalización y realización de acciones conjuntas.

Parece claro que las tensiones provocadas por la situación descrita repercutieron directamente al interior del B.S. y privaron también eficacia a su acción. En la medida que dos de los partidos integrantes del B.S. eran también miembros de la A.D. los acuerdos de ésta ponían límites a la acción del Bloque como un tercer referente nacional.

II.- EL ESTADO DE SITIO: PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS PARA EL MOVIMIENTO POPULAR

A la luz de lo anterior se puede concluir que el Estado de Sitio fue una respuesta que la dictadura debió ensayar frente al desarrollo de una movilización popular que si bien conseguía resultados importantes, se hallaba también afectada por las restricciones y límites que provocaban los desacuerdos ya analizados. A este respecto, sin embargo, es muy importante recordar que el antecedente inmediato del Estado de Sitio fue el éxito del Paro Nacional del 30 de Octubre. Esta Jornada, originada en un

acuerdo del C.N.T. y otras Organizaciones Sociales con las fuerzas políticas más decididas en la lucha activa contra la dictadura, prefiguró una situación muy amenazante para Pinochet. Este acudió a una medida que siempre tuvo su alcance, ahora y no antes, porque se dió cuenta que la realización de nuevos paros nacionales exitosos amagaba su posición de poder, a la vez que restaba peso al sector más moderado de la oposición, respecto del cual el propio Pinochet considera que tiene abierta la carta del llamado a negociar nuevas condiciones políticas.

La importancia de esta decisión exige analizar, separadamente, los diversos elementos que se presentarán durante la vigencia del Estado de Sitio.

a) *El significado político del Estado de Sitio.* Con la decisión del 6 de Noviembre Pinochet ha intentado, mediante los métodos compulsivos a los que es adicto, reordenar el escenario político logrando la clausura de las demandas que hacen las fuerzas democráticas, la imposición de un nuevo receso político y el retorno a un escenario de represión y fuerza. Para fundamentar su decisión ha utilizado hábilmente tanto la imagen de división de los opositores, como la ausencia de una alternativa común y las desinteligencias registradas en torno a cómo conseguir el fin de la dictadura. Sin embargo, por la naturaleza esencialmente jurídica del Estado de Sitio, esta medida no cambia, por sí misma, la realidad social del país ni la posición minoritaria del régimen y en su eficacia está condicionada por la calidad de la respuesta que las fuerzas de oposición entreguen.

Como en otras ocasiones Pinochet ha dado una respuesta audaz frente a los problemas que se le presentan. De nuevo ha recurrido al empleo de la fuerza, (cuyos límites no siempre parece comprender) y ha aceptado explícitamente, por la ausencia de cualquier proyecto o iniciativa reanimadora que haya acompañado al Estado de Sitio, que su régimen se convierta definitivamente en una dictadura sin hegemonía, que carece de proyecto estratégico y que suple con un uso intensivo de la represión el consenso político que ya no es capaz de conseguir.

Una encuesta realizada por DIAGNOS, luego de decretado el Estado de Sitio, mostró que más de dos tercios de los chilenos desean un cambio de gobierno antes de mediados del 86. Pinochet, por el contrario, se dispone a mantenerse, a cualquier precio en La Moneda hasta 1989 y, de ser posible, quedarse hasta 1997. Si antes soñaba con una reorganización capitalista de la sociedad chilena, llena de "modernizaciones" y con automóviles y T.V. a colores para todos, ahora su único proyecto es durar. De alguna manera al implantar el Estado de Sitio comienza a "meterse en el bunker". Ya no habrá tolerancia para los opositores ni nuevas negociaciones. El que no acepte el calendario trazado será reprimido; las organizaciones democráticas serán perseguidas si persisten en sus demandas de alcanzar la democracia. Esto significa que los efectos del Estado de Sitio no van a ser de corto plazo: con la actual fórmula o con otra; Pinochet necesitará el estado de excepción en forma permanente para tratar de mantenerse en el poder.

b) *Los efectos políticos del Estado de Sitio.* Es necesario admitir que el nuevo escenario político, complejizado por el incremento de la actividad represiva del régimen, ha creado cierto estado de confusión y desconcierto en las fuerzas opositoras, producto de las dificultades de adecuación a la nueva situación. Una perspectiva de prolongación excesiva de esta situación –inmovilización coercitiva de la fuerza social más confusión y desconcierto político– conlleva dos riesgos contradictorios entre sí, pero ambos funcionales a los objetivos del régimen. Ellos representan de una forma mucho más explícita, las tendencias que anteriormente sólo se insinuaron. Por una parte tiende a plantearse una línea "pragmática" que sólo imagina una modificación en el cuadro actual a través de una negociación con las F.F.A.A. en

que ya no se aspira ni siquiera a recuperar previamente la iniciativa política y por otro lado una *línea radicalizadora* que ve el Estado de Sitio como "un triunfo" de los sectores más decididos de la oposición que crea virtualmente las condiciones de una "crisis revolucionaria" que obligaría a centrar los esfuerzos en la polarización y militarización de la lucha como camino inevitable para la resolución del problema del poder.

De concretarse la primera opción afianzaría un diagnóstico y una actitud derrotista; sería la continuación, por otros medios, de la política de exclusión de determinados sectores de la izquierda (la exclusión como método de garantizar hegemonía). La segunda opción supone un diagnóstico triunfalista que al sobrevalorizar los niveles de organización, conciencia y capacidad de movilización actual del pueblo lleva a sus sostenedores a percibirse como una vanguardia excluyente al interior de una lucha que habría entrado a una fase superior que podría provocar una derrota militar del régimen.

Los efectos de la polarización que pueden provocar estas opciones son inquietantes. Cualquiera de las dos cancela indefinidamente toda posibilidad de acuerdo unitario de la oposición y suma al campo del "enemigo" a los sectores que excluye (el P.C. y sus aliados para la postura negociadora; la Centro-Derecha reformista para la visión de la crisis revolucionaria). Ambas significan también abandonar en los hechos la línea estratégica dominante en el período anterior con el efecto inevitable de división del movimiento democrático y el debilitamiento progresivo de las fuerzas sociales (pobladores, trabajadores, mujeres, estudiantes) que hasta ahora actuaron como el eje conductor de la lucha por la democracia.

Por ello el esfuerzo principal en esta hora debe ser una discusión franca, profunda, de estos temas para evitar que el pueblo pague los altos costos que ya se insinúan, de persistir la situación actual. Se trata, por lo tanto, de asumir con el mayor rigor las condiciones objetivas en que el país se desenvolverá durante el año 1985 para desprender de este análisis los caminos y las condiciones más apropiadas para retomar y profundizar el camino de la lucha popular por la democracia.

En esta perspectiva una primera interrogante que surge es determinar ¿cuáles serán las condiciones (económicas, internacionales, sociales, de iniciativa política) con las que el gobierno de Pinochet deberá aplicar el Estado de Sitio? En otras palabras, ¿Cabe esperar en 1985 condiciones apropiadas para renovar la lucha contra la dictadura?

Véamos las tendencias más importantes.

En *lo económico* todo parece indicar que el gobierno enfrentará difíciles condiciones de recesión, perdiéndose por completo los efectos parcialmente reactivadores de la primera mitad de 1984.

- 1.- Los pronósticos de crecimiento del Producto Geográfico Bruto (PGB) hechos por los propios partidarios del régimen son sombríos. El ex-Ministro de Pinochet, Andrés Passicott predice un descenso de 0.50%; el primer Director de Presupuesto de este Gobierno, Juan Villarzu pronostica una caída del P.G.B. de 3.50%. Entretanto un organismo al que nadie se atrevería a calificar de "subversivo" como el Banco de Boston concluye en sus estudios que la economía chilena decrecerá este año en un 2%.
- 2.- En cuanto a la posición financiera se calcula que Chile percibirá este año por el total de sus exportaciones poco más de 4 mil millones de dólares; las importaciones esenciales llegarán a unos 3.500 millones de dólares. Por su parte los compromisos derivados de la deuda externa ascenderán a 4.200 millones de dólares, lo que coloca al gobierno en una posición inmanejable de acuerdo a las

perspectivas de nuevos préstamos existentes en los mercados financieros y frenante a una tendencia persistente a la baja de los precios del cobre.

En *lo social* persistirá un escenario caracterizado por el desempleo, los desequilibrios sectoriales y la caída en los salarios reales de los trabajadores que coloca a un porcentaje cada vez más alto de la población por debajo de la barrera de la extrema pobreza.

- 1.- En Noviembre de 1984 se alcanzó el punto más alto de la desocupación real (la suma de cesantes más PEM y POJH). Mientras en el período 71-73 la desocupación fue de 3.90% y en el período 1974/83 llegó a 19.70% entre Septiembre y Noviembre de 1984 alcanzó a 24.40%.
- 2.- La población económicamente activa (P.E.A.) situada dentro de márgenes de sobrevivencia ha llegado virtualmente al 400% (39.70% de la fuerza de trabajo en 1982).
- 3.- El déficit de viviendas ha subido de 550.000 en 1974 a 800.000 en 1984. Solamente en la Región Metropolitana se calcula que hay 135.000 familias de bajos ingresos en condición de "allegados".

En *lo internacional* el aislamiento de la dictadura, que siempre fue muy alto, ha crecido todavía más después de la declaración del Estado de Sitio, como la prueba la excepcional declaración de los 10 Cancilleres de la Comunidad Económica Europea referida específicamente a Chile, demandando el retorno a la democracia; la condena de más de 90 gobiernos por la violación de los derechos humanos en Chile, en la Asamblea de Naciones Unidas en Diciembre último y las decisiones ya conocidas del Departamento de Estado de abandonar el apoyo directo a Pinochet, (que coincide con la partida del actual Embajador J. Theberge, un decidido partidario del régimen militar).

En *materia de iniciativa política* el gobierno de Pinochet no ha hecho más que confirmar la sensación de agotamiento de sus opciones que se tenía desde 1983. Como gráficamente lo ha señalado uno de sus más fieles partidarios, El Mercurio (La semana política 6/1/85) "El régimen no tiene un proyecto político permanente, ni parece estar dando —y ni siquiera concibiendo— pasos para un acercamiento hacia sus adversarios democráticos".... "El gobierno está, por tanto, expuesto a que el verano de que disfruta le resulte excesivamente breve. Su más urgente tarea es doble: concebir una estrategia económica perfectamente clara y permanente para sortear la parte más dura de la restricción externa y un proyecto político coherente que sirva de base a un consenso interno, capaz de garantizar una evolución seria hacia una democracia viable"....

En síntesis: pensamos que del examen más elemental de los factores básicos de la coyuntura predominante en 1985 se desprende que persistirán los factores de debilidad y los innumerables problemas que Pinochet deberá enfrentar debido a la mantención, y en algunos casos a la agudización, de los numerosos síntomas de la gravísima crisis en que la dictadura ha sumido a Chile. Ello creará condiciones, que deben ser previstas y trabajadas desde ahora, para una nueva y decisiva ofensiva del movimiento popular.

III.—LAS TAREAS PROPUESTAS AL MOVIMIENTO POPULAR

Todos tenemos conciencia que vienen tiempos difíciles.

En los próximos combates no tendremos ni siquiera las elementales garantías que nuestras propias acciones de protesta nos habían asegurado en etapas anteriores. Sin

embargo, el horizonte de la recuperación democrática sigue abierto si sabemos cumplir las tareas necesarias.

Muchas de ellas serán menos espectaculares, aunque no menos importante que las realizadas hace algunos meses:

Las Tareas de los Militantes

1.— *"La organización: base del protagonismo popular."* Persistir en las tareas de reconstrucción de la organización popular para que, al haber más pueblo organizado, el trabajo del movimiento popular tenga mayor permanencia y continuidad. Cada sindicato, cada Federación Estudiantil, cada Organización de mujeres o de Pobladores, cada Agrupación de Profesionales, Comerciantes o Transportistas, que se reorganice ofrece una oportunidad para fortalecer la lucha democrática. A su vez el quehacer unitario en todos estos sectores debiera permitirnos tener plataformas de reivindicación especializadas en cada uno de ellos. La suma de estas debiera dar lugar a un *petitorio nacional* suscrito por representantes de todas las organizaciones sociales y populares. Desde el punto de vista organizativo debiera proseguir los esfuerzos para contribuir a la creación de una entidad multisocial.

2.— *La conciencia como poder liberador:* Desarrollar la Educación Popular y la Capacitación. Debemos aprovechar la reducción temporal de algunas actividades públicas para fortalecer la preparación de todos quienes trabajan activamente en las tareas democráticas. El reforzamiento de la capacidad política de dirigentes y militantes de base es una necesidad para elevar la calidad y eficacia de nuestra acción. Por eso en cada C.P.S. y en cada local o regional es preciso programar, con los recursos de que se dispongan, jornadas y planes de educación políticas en forma permanente. La dirección nacional estudiará la mejor forma de apoyar estos esfuerzos.

3.— *Levadura en la masa:* Apoyar el trabajo unitario en la base. La experiencia nos enseña que en los locales de trabajo y en los centros habitacionales donde se desarrolla la vida cotidiana de los trabajadores se comprende y se valoriza mucho más la necesidad de la unidad como un requisito para la eficacia del trabajo por la recuperación de la democracia. Dentro de las esenciales exigencias de una posición política justa, en los términos que se describen en este documento, nuestra disposición debe ser abierta y generosa para favorecer este objetivo, porque la finalidad última de nuestro quehacer es el fortalecimiento y protagonismo del movimiento popular.

Los Deberes de la Dirección

Además de apoyar decididamente las tareas anteriores y de hacer un esfuerzo por mantener el contacto más permanente que sea posible con las organizaciones sociales y la base popular, creemos que la dirección debe desarrollar algunas tareas fundamentales en el período próximo de cuyo cumplimiento dependerá nuestra contribución a la lucha por la democratización en Chile.

1.— *Nuestra primera prioridad: la lucha antidictatorial:* Trabajaremos en la preparación de propuestas específicas que ayuden al buen entendimiento de las fuerzas democráticas y permitan superar los desacuerdos actualmente existentes. En este sentido conferiremos prioridad al estudio de propuestas para un programa común para la lucha democrática que resuelva los problemas que hoy tenemos. Si se acepta la consecuentemente como el camino principal y permanente, todo el debate sobre el uso de la violencia deja de tener los efecto disgregadores que hoy advertimos. Deja

de ser un asunto de principios y su contenido pasa a estar subordinado a la funcionalidad de las acciones concretas con la opción de la lucha política y de masas. En este cuadro las tareas de autodefensa y otras que permitan desarrollar eficazmente los esfuerzos de liberación democrática de sectores sociales cada vez más amplios en favor del programa común deben ser impulsados; aquellos que polaricen el cuadro político y faciliten al gobierno la tarea de dividir a sus adversarios deben ser evitados. Sobre este punto deben existir acuerdos claros y obligatorios para todas las fuerzas opositoras, sin que exista el derecho a desarrollar ninguna forma de actividad autónoma en este terreno.

Otro asunto que requiere una decisión clara es el manejo del período de transición que seguirá al término del régimen de Pinochet. Esto incluye la caracterización del gobierno de transición y los objetivos elementales del programa de emergencia que deberá aplicar. Equipos técnicos de las organizaciones democráticas están en condiciones de formalizar algunos planes que, en ese momento, tendrán una importancia decisiva como un programa nacional de empleo y un programa nacional de satisfacción de las necesidades básicas populares. Un aspecto muy importante también será la existencia de un consenso acerca de las bases fundamentales de un sistema político democrático, capaz de asegurar una participación efectiva a las organizaciones populares, de garantizar el respeto de los derechos humanos, de afianzar la vigencia del principio de soberanía popular y de poner límites razonables al ejercicio de la autoridad. Este fue el sentido básico del Pacto Constitucional que nosotros impulsamos decididamente; a pesar del fracaso temporal de este, una iniciativa semajante debe ser considerada en el futuro.

2.— *Proyecto Nacional y Nueva Fuerza Socialista.* Seguiremos avanzando en la definición de un proyecto nacional que sirva a los objetivos de la democracia y el socialismo en Chile y asegure las características fundamentales que deseamos para ese proceso, esto, es su carácter popular, revolucionario y autónomo, con una inserción internacional basada en los principios de la auto-determinación y el no alineamiento.

El Bloque Socialista enfrenta serias contradicciones para transformarse en el referente más amplio y vigoroso que enarbole tal proyecto y sea capaz de convocar y representar a todo el pueblo socialista. Las disyuntivas que enfrenta podrá resolverlas en el corto plazo o en un proceso más profundo, pero hoy no pueden eludirse, si aspiramos a ser una fuerza mayoritaria y hegemónica en la sociedad chilena. Así, la adhesión a la democracia puede ser solo expresión de una política reformista estabilizadora del capitalismo y abandono o postergación indefinida del objetivo socialista o, por el contrario, elemento sustancial de un proyecto de cambio que buscará combinar el socialismo como organización social y económica con formas participativas, libertarias, representativas y de democracia directa en la organización política de la nueva sociedad. Del mismo modo, en el plano táctico de la lucha contra la dictadura y por la democratización, la fuerza socialista deberá optar entre ser una fuerza moderada, admitida al juego de la democracia "concedida" o ser una fuerza gravitante de la política de intransigencia democrática y de derrota política del régimen con la fuerza del movimiento de masas.

El proceso de construcción de una nueva fuerza socialista requerirá la participación de muchos sectores sociales y políticos que conforman lo que hemos denominado el área socialista. Hacia ellos seguirá abierta nuestra política, aún cuando en el corto plazo no existan condiciones para producir acercamientos con las fuerzas incluidas en el Bloque Socialista.

Reiteramos nuestra convicción de que sólo un actor socialista plenamente autónomo y con una definida voluntad democrática y revolucionaria puede jugar un rol diri-

gente y decisivo en las luchas populares que quedan por delante.

3.- *Compromiso en la lucha.* Nos esforzaremos por aumentar nuestra presencia directa en las luchas cotidianas que libra a nuestro pueblo. Desde su fundación, la I.C. ha considerado que los dirigentes populares deben compartir la suerte del pueblo chileno, participando de sus afanes y esperanzas. En estos tiempos duros que vendrán, este imperativo ético será aún más importante. Esto ha determinado una distribución de tareas de los miembros de la C.P. y el C.C que permita cumplir concretamente estas metas.

Las Tareas Frente al Conjunto de las Organizaciones Democráticas

A lo largo de este documento hemos subrayado las dificultades que los esfuerzos unitarios encontraron en el pasado inmediato, así como el peligro todavía mayor de una polarización que se presenta a partir de la declaración del Estado de Sitio. Esto obliga a invertir con tenacidad especiales esfuerzos para cambiar esta situación, dentro de una actitud política respetuosa del pensamiento de los demás, pero decidida de la defensa de los principios que se consideran fundamentales para el éxito de la empresa común.

Se trata de dar forma en las nuevas condiciones a un proyecto común que readecue los objetivos de la movilización social y desobediencia civil y las formas de concertación unitaria del pueblo. Es en esta perspectiva que formulamos las propuestas que se expresarán a continuación. Estamos cierto que su factibilidad descansa en la existencia de un amplio activo, que cruza todo el arco político y social, de definida vocación democrática, como, asimismo, estamos conscientes que su concreción requerirá de pasos previos que reestablezcan un horizonte de colaboración y trabajo constructivo entre todas las fuerzas que comparten una voluntad de lucha por la democracia. Se requiere, por lo mismo, de un esfuerzo consciente encaminado a restablecer un clima de credibilidad y mutua confianza. Los contenidos de esta propuesta han sido previamente discutido con amplios sectores y personalidades sociales y políticas. Avanzamos en su formalización como un aporte abierto al conjunto de las fuerzas democráticas, sin otra pretensión que servir lealmente a nuestro pueblo.

1.- Del análisis expuesto precedentemente concluimos que las cuestiones principales y decisivas para las fuerzas democráticas son dos:

- a) persistir en el desarrollo de la línea estratégica democrática (movilización—desobediencia civil) y, por ende, rechazar el abandono fáctico que pretende el régimen; y
- b) adecuar la dirección y empleo de la fuerza civil al nuevo escenario político que se abre a partir de la implantación del estado de sitio. La pregunta central que se nos plantea es, pues, cómo re establecer la capacidad de movimiento de la fuerza social en un contexto de inmovilización coercitiva que la afecta. Cómo recuperar la capacidad autónoma de movimiento de la fuerza civil en circunstancias que ésta se encuentra sitiada por el Estado.

La correcta resolución de este problema pasa a ser el factor decisivo en la continuación de la lucha democrática y antidictatorial. Este planteo conlleva un diagnóstico que se distancia igualmente de percepciones derrotistas y triunfalistas. El estado de sitio es el último mecanismo de defensa que le ofrece la institucionalidad del régimen. Es un desafío mayor, pero no imprevisible y, en todo caso, posible. Supone valorar profundamente los avances alcanzados en materia de organización y conciencia democráticas y la experiencia acumulada en los últimos años por el movimiento social. (No partimos de cero, sino de

los ya altos niveles alcanzados).

2.- Si la cuestión central es cómo restituirlle al movimiento social su capacidad autónoma de movimiento en una situación inmovilización por coerción, la respuesta se ubica en el plano político y técnico. En el *nivel político*, conlleva la exigencia de superar las deficiencias e insuficiencias en la fase previa al estado de sitio. La superación radica, principalmente, en tres aspectos:

- a) respecto de los actores políticos, se trata de reimponer la voluntad de concertación para el logro del objetivo democrático comúnmente compartido por sobre una práctica de lucha de hegemonía entre las fuerzas democráticas que privilegió la voluntad de ofrecerse como alternativa de gobierno por sobre las exigencias unitarias que imponía el objetivo democrático.
- b) reponer un órgano de dirección idóneo de la fuerza social, con competencia política necesaria y legitimidad suficiente para coadyuvar al conjunto diverso del cuerpo social.
- c) desideologizar y despartidizar la lucha democrática, subrayando a nivel del discurso y el mensaje simbólico la unidad sustancial que liga al conjunto de las fuerzas democráticas por sobre las diferencias que necesaria y legítimamente existen. Se trata de afirmar que las discrepancias tienen un límite y que el límite de las diferencias lo define nuestro compromiso consecuente con la democracia. En el *nivel técnico*, se trata de readecuar la organización, los objetivos y los métodos de movimiento de la fuerza social al nuevo contexto político nacional, partiendo de la base de que el estado de sitio no es un incidente ni un parentesis, sino que un dato con el valor de una constante. La *seguridad* y eficacia en la acción son requisitos necesarios del movimiento en el logro del objetivo principal, cual es la pérdida de la capacidad de gobernabilidad del régimen, que se debe expresar en la pérdida de control del funcionamiento normal de la ciudad y la pérdida de control de los instrumentos políticos propios del aparato estatal, como por ejemplo, el uso de los mecanismos de recaudación de los fondos públicos. En este mismo nivel, se plantean exigencias técnicas de romper el cerco de incomunicación impuesto por el régimen.

3.- Partiendo de lo existente, sin negar nada de lo ya existente, sin imponer condiciones previas a nadie, se trata de no reproducir mecánicamente el pasado inmediato, precio al estado de sitio; Sólo una síntesis superadora re establecerá la plena credibilidad y legitimidad del movimiento opositor en su conjunto en la lucha democrática de nuestro pueblo.

La propuesta política que formulamos, basada en la línea estratégica fundamental que tiene por eje principal al movimiento social, contiene los siguientes elementos esenciales:

- a) la constitución de un *movimiento*, frente o grupo, que se proponga representar políticamente y conducir al movimiento o fuerza social en la lucha contra la dictadura en el actual contexto político nacional;
- b) El elemento político definitorio del movimiento, frente o grupo, será el de una común voluntad política de *intransigencia democrática*, expresada tanto en sus *objetivos* como en los *métodos*. El objetivo es la recuperación plena de la democracia, restituyéndole integralmente la soberanía al pueblo. Los métodos quedan determinados por la naturaleza de la fuerza social. No niega ni anatemiza de otras formas de acción, a condición de que ellas se subordinan al desarrollo y pleno empleo de la fuerza civil y sean coherentes con los objetivos democráticos.
- c) El movimiento, frente o grupo no persigue fines ideológico-partidistas sino

que, basado en el más irrestricto pluralismo, se afirma en la existencia de un patrimonio cultural común de las fuerzas democráticas y en las aspiraciones profundamente sentidas por todos y cada uno de los chilenos, como la aspiración a la liberación, la democracia, la paz, la justicia, el trabajo, la libertad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, por cuya plena vigencia luchamos.

d) La constitución de un *órgano de dirección* que sea, en su conformación, una síntesis de actores sociales y políticos democráticos sin discriminación de ninguna especie. Sus miembros, además de representatividad y probada autoridad moral, deben gozar de autonomía en el ejercicio de los objetivos de representación política y de conducción de la fuerza social que se propone el movimiento, frente o grupo.

El órgano de dirección podrá adecuar su estructuración al de la representación política nacional y a la organización del movimiento social, respondiendo a los nuevos requerimientos técnicos que impone la situación.

e) La formulación de un *programa de acción común* que comprende:

- i. la elaboración de un Manifiesto como fundamento unitario de la acción.
- ii. elaboración de una plataforma política común de lucha representativa de los más amplios sectores sociales y políticos.
- iii. elaboración de plataformas reivindicativas de cada sector social, bajo el compromiso que su satisfacción serán objetivos prioritarios del futuro gobierno democrático.
- iv. elaboración de un plan de movilización común y sectorial que canalice la voluntad y decisión de lucha democrática de nuestro pueblo.
- v. formas de materialización del principio de solidaridad activa: la represión o agresión del régimen a un actor democrático será considerada agresión al conjunto de las fuerzas democráticas.

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS:

Los planteamientos expresados reflejan el estado actual de nuestro trabajo y nuestra discusión. Hemos querido compartirlo con ustedes porque estamos convencidos que el debate democrático de nuestras ideas nos ayudará a mejorárlas y a asegurar su mejor ejecución. Nos interesa especialmente encontrar en común un espacio realista para la esperanza. Debemos combatir la tendencia al desánimo y al pesimismo porque eso es lo que busca justamente la dictadura y, si lo consigue, no sólo prolongará muchos de los sufrimientos concretos que padece nuestro pueblo sino que atrasará el día en que de nuevo "se abrirán las grandes alamedas". Los invitamos a comunicarnos el resultado de las discusiones que en torno de este documento realicen con dirigentes y militantes de las demás organizaciones populares.

Reciban todos en el inicio de este nuevo año de lucha por la democracia y la libertad nuestros saludos fraternales.

Comisión Política
IZQUIERDA CRISTIANA